

El Salvador: un proceso de modernización y reformas como antecedentes de la guerra civil

El Salvador: A Modernization and Reform Process as Background of the Civil War

**Silvana Graciela
Montaruli¹**

Universidad Nacional de Cuyo

Recepción: 10/11/2019

Aceptación: 20/12/2019

Resumen: El trabajo que presentamos trata puntualmente de tres hechos que, a nuestro entender, fueron determinantes para el desarrollo de la guerra civil salvadoreña. Los fracasos de democratización en el proceso electoral, su guerra con Honduras y los fallidos intentos de Reforma Agraria crearon paradójicamente la conciencia en el pueblo salvadoreño que todo su ser estaba comprometido en estas problemáticas y que dependía del pueblo mismo continuar o romper una lucha de sometimiento que había afectado durante años la posibilidad de desarrollo de su país. A conciencia de que el camino hacia la libertad no era fácil, los salvadoreños emprendieron el difícil desafío de enfrentar al poder establecido y a las políticas extranjeras que utilizaban a su país con intereses y fines que nada tenían que ver con las necesidades del pueblo. Doce años de lucha intensa, profunda, dolorosa que puede encontrar sus causas en los hechos que aquí trabajamos tomando para ello la reflexión de Ignacio Ellacuría en el análisis que muestran sus textos a propósito de la guerra civil salvadoreña.

Palabras Clave: Ignacio Ellacuría, Guerra civil salvadoreña, Política, Justicia social.

Abstract: The work that we present deals promptly with three facts that, in our opinion, were decisive for the development of the Salvadoran civil war. The failures of democratization in the electoral process, its war with Honduras and the failed attempts at Agrarian Reform paradoxically created awareness in the Salvadoran people that their whole being was engaged in these problems and that it was up to the people themselves to continue or break a struggle of submission that had affected their country's development possibility for years. Aware that the road to freedom was not easy, Salvadorans undertook the difficult challenge of facing established power and foreign policies that used their country with interests and ends that had nothing to do with the needs of the people. Twelve years of intense, deep and painful struggle that its causes can find in the reflections of Ignacio Ellacuría. We will analyze here your texts on the Salvadoran civil war.

Keywords: Ignacio Ellacuría, Salvadoran civil war, Politics, Social justice.

¹ edfra72@hotmail.com

Introducción

Nuestro trabajo tiene como eje central reflexionar acerca de la relación de la economía con algunos hechos políticos que gestaron la guerra civil salvadoreña. Recordemos que, desde la década del 30, las relaciones económicas y políticas sembraron las raíces de una lucha político social en la que la economía y principalmente la reforma agraria, sumada a la relación entre Estados Unidos y El Salvador, en un contexto regional de fuertes turbulencias económicas y políticas, condujeron el camino hacia el deterioro de las condiciones mínimas de trabajo de los salvadoreños.

Pensamos que las decisiones políticas están íntimamente relacionadas con la situación económica de un país y esta, muchas veces, las determina. Una mirada político social de la guerra salvadoreña declarada sobre la década del 80 sin vincularla a su historia económica, sin detenerse en la situación de los trabajadores del campo y en su lucha contra los grandes hacendados, solo proporciona una visión parcial sobre el tema. Lejos de esa mirada, lo que ofrecemos a continuación es un análisis de la situación de ese país por aquellos años en los que comenzaban las protestas sociales como consecuencia de la distribución de la tierra y de la concentración de la economía en manos de grandes propietarios.

Nuestro análisis se desarrolla sobre tres hechos que, a nuestro entender, fueron determinantes en el destino del pueblo salvadoreño, en una época en la que la región centroamericana sufrió en muchos casos situaciones similares: la protesta en el año 1932, la guerra contra Honduras en 1969 y el intento de reforma agraria durante la década del 70, en un contexto de gobiernos autoritarios y de ejércitos de seguridad que no podían frenar el descontento social.

En cuanto al primer hecho, se dio como una reacción ante el fraude electoral acontecido durante las elecciones del año anterior, vinculado a la situación que los trabajadores venían padeciendo a raíz de la posesión de las tierras a manos de grandes hacendados y al valor en baja del trabajo rural. El segundo hecho, está estrechamente ligado a un proceso de descomposición salarial, de gobiernos de control y de una desvalorización del trabajo del campo; la consecuencia fue la fuerte inmigración de los campesinos a tierras hondureñas. Como resultado del choque provocado por la posesión de la tierra a manos de los salvadoreños en aquel país y el descontento social que esto provocó en los hondureños, se produjo una guerra que duró 100 horas, así se la conoce históricamente. Por último, la década del 70 sería de fuertes cambios políticos y económicos en la que se entrecruzaron repetidos intentos de democratización, búsqueda de una reforma agraria que permitiera una

recomposición del trabajo, gobiernos militares y de ultra derecha, movimientos sociales y formación de ejércitos disidentes; en un contexto regional de fuerte intervención norteamericana con el objetivo de frenar el avance de la izquierda en los países que consideraba estratégicos para su orden imperial.

Nos proponemos mostrar, en líneas generales, que estos hechos fueron fundamentales en la conformación de los procesos conflictivos de ese país y que tuvieron su raíz en la modernización y en el orden de sociedades con matriz oligárquica.

Para esto trabajamos algunos textos de los “Escritos Políticos” de Ignacio Ellacuría por considerar que son ellos una excelente oportunidad para hacer una lectura de El Salvador durante los años más difíciles de su historia.

Desarrollo

La historia de los países latinoamericanos y especialmente los centroamericanos muestra que los fenómenos políticos, económicos y sociales siguieron una lógica regional que respondió a la aplicación de similares formas de modernización. Por tal motivo, estos países, compartieron matrices políticas y económicas básicamente de matiz elitista.

Podemos decir que en las primeras décadas de 1900 la modernidad capitalista afectó a la agricultura de exportación, la expansión de la frontera agrícola significó para los campesinos el aumento de la expropiación y de la pobreza, las tierras fueron redistribuidas a las familias más tradicionales y la fuerza de trabajo percibió salarios muy bajos. Se trató de la implementación de un modelo primario- exportador, *“cuyo motor de crecimiento económico se encontraba en el exterior y dependía de la demanda de las economías industrializadas del centro del sistema capitalista mundial”* (Ansaldi, W. y Giordano, V. 2009, 469).

En este contexto la forma dominante del poder era a través de la oligarquía, definida como: *“una forma histórica de ejercicio de la dominación política de clase, caracterizada por la concentración del poder en una minoría y la exclusión de la mayoría de la sociedad de los mecanismos de decisión política”*. (Ansaldi, W. y Giordano, V. 2009, 465-466). Esta forma de dominación social fue común en la mayoría de los países latinoamericanos y en el caso de El Salvador estuvo acompañada por la acción de las fuerzas de seguridad con el objetivo de controlar los reclamos sociales y el ejercicio del poder.

Las clases trabajadoras, en especial la obrera vinculada en un primer momento al trabajo de la tierra, expresaron su descontento con el sistema, en tanto no solo se

trataba de la expropiación de las tierras, sino además la explotación por el trabajo y continuos intentos fallidos de democratización. Iosu Perales señala como primer levantamiento social al ocurrido en la década del treinta cuya importancia fue, a nuestro entender, el haber significado la formación de la conciencia del hombre de campo en cuanto a sus derechos como trabajador y como ciudadano, a partir de la cual comenzaron a ponerse en hechos, los mecanismos y las acciones de protesta con el objetivo de que sus voces fueran escuchadas como trabajadores de la tierra. Si bien la protesta a la que nos referimos tuvo que ver con un fraude electoral, la contienda política entre la derecha y la izquierda tenía su raíz en las políticas económicas del momento.

Recordemos que entre 1898 y 1931 el país atravesó un periodo de estabilidad en el que los presidentes se sucedieron legalmente, aunque sin abandonar el rasgo autoritario del ejercicio de la dominación oligárquica. La violencia fue un componente de las relaciones sociales en El Salvador, a tal punto que el último de los tres presidentes que se sucedieron entre 1898 y 1913 no concluyó su mandato pues fue asesinado por campesinos quienes lo atacaron durante la celebración de un acto público. Paradigmáticamente desde 1913 (y hasta la imposición de una dictadura autocrática tradicional en 1931) la oligarquía fue ejercida por un puñado de familias que pertenecían a la dinastía de los Melendez- Quiñonez.

Hacia fines de la década de 1920 las protestas rurales volvieron a surgir.

La explotación del café se basaba entre otras cosas, en un conjunto de leyes que no hacían más que legalizar la violencia. Los propietarios cafeteros podían legalmente forzar a los campesinos de las aldeas al trabajo obligado en sus plantaciones, para lo cual contaban con la ayuda del Ejército. En este contexto, Agustín Farabundo Martí despuntó como líder marxista.

En 1931 se produjo el primer golpe de estado, a días de estar fijadas las elecciones, previstas para enero de 1932. De una manera desprolija el gobierno decidió suspender las elecciones, convocándolas para días después del previsto. Este hecho convocó al pueblo a la calle, para reclamar la medida tomada. (Perales, I. 2009, 3)

En algunos lugares, sin embargo, las elecciones llegaron a realizarse, y el partido de izquierda obtuvo el triunfo. Frente a la iniciativa del gobierno de dar por inválidas las mesas electorales, Farabundo Martí (que dirigía el partido comunista), organizó una insurrección para el día 14 de enero, con el objetivo de que se le reconociera al partido comunista el triunfo de la elección. Sin embargo, fue traicionado y descubierto, por lo que el levantamiento pudo ser evitado por las fuerzas de seguridad. La insurrección popular, se concretó, de todos modos, el día 22 de ese

mismo mes y trajo como consecuencia la muerte de muchos civiles, por lo que es recordada aún hoy, como uno de los peores genocidios de la época. A pesar de que los grupos manifestantes pudieron ser sofocados por las fuerzas de seguridad, significó en un sentido la formación de la conciencia colectiva de las masas populares, dando lugar a la creación de las bases para una organización de luchas con participación social.

Una breve reseña de los sucesos acontecidos hasta el año 1932 nos recuerda que en 1913 la oligarquía había sido ejercida por un puñado de familias pertenecientes al partido demócrata. En 1918 Alfonso Quiñones, en calidad de vicepresidente a cargo del gobierno de Carlos Melendez, fundó la *liga Roja*, una organización que debía canalizar las demandas de los trabajadores y los campesinos frente al Estado. Como era de esperarse bajo el dominio de las familias más influyentes del país, esta organización, lejos de ejercer la función para la que había sido creada solo sirvió para favorecer los intereses del gobierno.

Ansaldi y Giordano afirman al respecto que:

hacia fines de 1920 las protestas rurales volvieron a surgir. La explotación del café se basaba en un conjunto de leyes que no hacían más que legalizar la violencia. En un contexto de gran descontento social el presidente de turno, Pio Romero Bosque, convocó a elecciones. Salió favorecido Arturo Araujo, fundador del flamante Partido Laborista salvadoreño, inspirado en la cultura política de Inglaterra. Su gobierno intentó poner en práctica un programa de tímidas reformas sociales. Pronto, los sectores dominantes de la oligarquía cerraron filas tras la figura del general Maximiliano Hernández Martínez quien ejerció una dictadura autocrática. (Ansaldi, W. y Giordano, V. 2009, 528)

Desde una posición crítica es posible afirmar que las tensiones sociales de la década de 1930 pusieron de manifiesto el juego de relaciones que enfrentaron a un discurso opresor con un discurso emancipador. Este discurso fue posible desde la conciencia de la necesidad de reconocimiento de la propia humanidad, por parte de aquellos sectores sociales que se veían impedidos en el ejercicio de sus derechos más vitales, como pueden ser los vinculados a la satisfacción de las necesidades o a la remuneración justa a cambio del trabajo realizado. La dignidad, intrínseca al hombre, que trabajaba en el campo exigía ser reconocida; y en este sentido, los movimientos sociales salvadoreños fueron creciendo y afirmándose desde esta matriz de pensamiento. Surgieron para reivindicarse como sujetos de su propia historia y no como objetos necesarios para la construcción de historias ajenas.

Podemos afirmar que todas las expresiones que hicieron escuchar su voz de uno o de otro modo, no se alzaron desde la disputa por el poder sino desde la opresión del

poder vigente, qué llevando adelante medidas siempre vinculadas al dominio de las clases más pudientes, asfixiaban la posibilidad de desarrollo de las clases trabajadoras, y esto era comprensible pues para conservar el poder era claro que se tenía que hacer:

Si la condición real de todo ello es que se mantenga la actual estructura socio económica y política, que los medios de producción sigan estando en determinadas manos, que la distribución de la tierra sea como la actual entonces tenemos que quienes defienden las causas son también responsables de los efectos. Y son también responsables los que por omisión no hacen todo lo que está en su mano para resolver lo que está mal. (Ellacuría, I. 1978^a-2005, 715)

Esta realidad en los países centroamericanos fue una constante durante las décadas siguientes, aquellas protestas que brotaron en un primer momento como hechos aislados, aunque continuos, fueron afianzándose a lo largo de los años, profundizando brechas, sufriendo violaciones de los derechos humanos, ejerciendo un poder autoritario, pero también afirmando la protesta, de manera cada vez mejor organizada.

Las medidas económicas fueron más desfavorables para el desarrollo interno, el ejercicio del poder se dio a través de gobiernos oligárquicos, generalmente a cargo de las familias más tradicionales; la economía familiar se vio fuertemente afectada por los bajos salarios y la baja rentabilidad del trabajo de la tierra, sumado a la utilización de la fuerza represiva como garantía de poder de los sectores más privilegiados. La confluencia de todos estos elementos es lo que nos permite hoy poder tener una mirada más profunda y objetiva frente a los movimientos de masas que se levantaron en armas en enero de 1981 y que resistieron política y socialmente movidos por la reivindicación del valor del “ser” por sobre el valor del “tener”. En tal sentido debemos considerar que toda la lucha por el reconocimiento de la economía y del valor del trabajo, no solo se asentaba sobre las condiciones materiales del hombre, sino sobre las condiciones del ser del hombre en su más íntima esencia de “ser” dignos de derechos.

Por otra parte, la década del 60 presenta como signo particular la crisis laboral vinculada al sector agrícola. Como hemos dicho anteriormente los grandes hacendados controlaban la mayor parte de las tierras cultivables en el Salvador ya desde 1920. Los sucesivos gobiernos de esa época se opusieron a cualquier proyecto que significara la redistribución de la tierra a favor de los campesinos, lo que provocó a fin de esa década, la continua emigración a tierras hondureñas a fin de poder encontrar mejores recursos de vida. Con el tiempo la población salvadoreña fue

creciendo en aquel país y los trabajadores fueron convirtiéndose en propietarios, lo que condujo a un choque entre hondureños y salvadoreños. Esta situación fue agravándose y los hondureños pidieron acciones que limitaran la inmigración. El gobierno llevó adelante una reforma agraria contra los salvadoreños, cuyos ejes centrales fueron la expropiación de las tierras a los campesinos que habían ganado su titularidad a base del propio esfuerzo y la expulsión de los jornaleros residentes en el país.

El hostigamiento y la persecución a los residentes salvadoreños en Honduras puso sobre la mesa el juego de tensiones que permitió tomar conciencia del valor de los derechos por sobre las leyes:

Solo en circunstancias dramáticas de crisis total, los pueblos alcanzan la lucidez y la energía precisas para lograr una conversión decisiva de alcance revolucionario. Son estas convulsiones históricas las que permitirán alcanzar la conciencia imprescindible para que tanto los salvadoreños residentes en Honduras como los salvadoreños residentes en El Salvador salgan de un mundo que les niega lo que les es debido y lo que tienen la obligación de exigir. (Ellacuría, I. 1969-2005, 504)

El fin de la guerra contra Honduras no significó la derrota de los salvadoreños pues aquellos que tuvieron que volver a su país, lo hicieron con el convencimiento de que debían volver para poder tomar posesión de lo que se les había negado, aquellas tierras productivas gracias al esfuerzo de su propio trabajo. Sabían que no sería fácil, pues no era una lucha entre salvadoreños sino también entre políticas externas, pues ya Estados Unidos no solo participaba de las decisiones de los gobiernos de El Salvador sino también de los de otros países, pues su interés en la región comenzaba a quedar expuesto contra el posible avance de la izquierda en su zona de control.

El último hecho al que queremos referimos es la reforma agraria y para ello partimos de la afirmación de que el término “reforma” implica un cambio o una transformación en las formas de propiedad, en el poder y por lo tanto en el disfrute de los beneficios de la tierra. Cuando estas reformas que determinan la estructuración social benefician a un determinado sector, se produce la desigualdad entre los diferentes sectores de la estructura, en tanto solo uno es el que goza de los beneficios y detenta el poder.

Aquel poder predominantemente social que está basado en condiciones sobre las cuales los sometidos a ese poder no tienen ninguna forma de control, deja potencialmente en condición de oprimido a los sometidos y de opresor a los sometedores. La dependencia es máxima y lo es consecuentemente la situación de opresión social a la cual favorecen toda suerte de presiones tanto de índole física como cultural. (Ellacuría, I. 1973-2005, 576)

Para evitar la concentración del poder, debían aplicarse políticas inclusivas que permitieran la participación de los trabajadores campesinos, pero además, la tierra debía ser distribuida fundamentalmente al sector de los trabajadores. Durante la década de 1970, la reforma fue entendida en función de un beneficio social que no se daría en la práctica, pues terminó beneficiando a los grandes latifundios y al mercado extranjero.

Coincidimos con Ellacuría cuando afirma que más allá del examen de una propiedad privada o comunitaria propias del capitalismo o del comunismo, se considera que en el tema de la reforma agraria estaba en juego la propiedad privada y sus supuestos, pero también lo estaba el ser mismo del hombre salvadoreño y de la sociedad salvadoreña en tanto relacionado con esta realidad estaba el hecho de la desigualdad extrema en el disfrute del patrimonio nacional (Ver: Ellacuría, I. 1973-2005, 574).

Esta fue la situación de El Salvador en el desarrollo de las economías que favorecieron la explotación de la tierra por algunos hacendados, concentrando el poder en ellos y desprotegiendo a la clase obrera de la tierra. De este modo la sociedad fue configurándose bajo un juego de tensiones que tenía como núcleos la injusticia social y la protesta y cuya causa fue la constante que atravesó todos esos años: el empobrecimiento de las masas trabajadoras.

Todo lo anterior nos plantea la relación entre riqueza y pobreza cuya fuerza de acción estaba en el poder como valor capital. Así debemos plantearnos si el pueblo se ve desprovisto del poder político que le corresponde en el disfrute de su propia realidad nacional, porque la estructuración social reflejada en ella, le priva de las posibilidades reales de ejercitar ese poder o de ejercitar el derecho que tiene a ese poder.

Esto permite comprender las relaciones asimétricas propias entre aquellos que tenían el control sobre la producción de la tierra y el campesinado que por lo mismo creaba también relaciones asimétricas en la organización política del estado. Cuando un sector minoritario detenta el poder porque tiene el control sobre los recursos inmediatamente hay un sector que pierde ese poder y por tanto queda desposeído, no solo de las decisiones de un estado sino incluso de su propia propiedad. El trabajador del campo, por representar a la mayoría del pueblo y por ser uno de los mayores generadores de la riqueza nacional, debía ser, según Ellacuría, uno de los responsables más calificados en la gestión política.

En ese terreno la apertura hacia nuevas formas de distribución de la tierra, o de redistribución de los beneficios productivos fue haciéndose cada vez más difícil, pues

las posibilidades de diálogo entre los sectores oligárquicos, el campo y el gobierno fueron debilitándose a la vez que el descontento social, las protestas, las huelgas y la represión por las fuerzas de seguridad daban paso a la formación de ejércitos paralelos constituidos fundamentalmente por campesinos y por aquellos que huían de la ciudad perseguidos por sus ideas.

Tras la promulgación del Primer Proyecto de Reforma Agraria, la ANEP (Asociación Nacional de la Empresa Privada), tomó una posición crítica frente a las primeras medidas argumentando básicamente desde la productividad.

El gobierno iba más allá de los niveles de producción y centraba su atención en los modos de vida que los salvadoreños estaban llevando, poniendo énfasis en que la reforma debía resolver otro tipo de problemas más profundos a nivel de justicia social.

El gobierno respondía a la ANEP con algunos índices a fin de mostrar la gravedad de la situación: “cinco propietarios poseen 17 mil manzanas, 2400 propietarios poseen en conjunto 5mil manzanas; en el área el índice de analfabetismo es del 65 % el déficit de servicios sanitarios es del 98% el de servicios de agua potable es del 50% y el de la vivienda es del 35%. Las condiciones de desempleo en el área son del 54.3 por ciento de manera que las expectativas de trabajo de los campesinos son apenas de 141 días al año. El 38% de los propietarios agrícolas del área obtienen de sus tierras 35 centavos diarios mientras que cinco propietarios del área tienen ingresos diarios de 2,400 colones por tanto un propietario tiene el ingreso de 6900 familias”. (En: Ellacuría I. 1976b-2005, 597)².

Era comprensible que el alto índice de analfabetismo, falta de servicios públicos básicos e indispensables para una vida digna, el alto nivel de desempleo, la falta de relación entre los salarios y los índices de producción y la concentración de los sectores productivos, no estaban en la agenda de ANEP del mismo modo que lo estaba en la del gobierno. Los intereses eran diversos, y la justificación de esos intereses era la que determinaría el sentido y el rumbo de la transformación.

Otro fundamento que el gobierno daba a la ANEP consistía en observar que mientras los empresarios privados medían el cambio de estructuras económicas desde la óptica de sus intereses, era necesario centrarse en problemas que no eran posibles de solución desde un enfoque productivo. Estos solo pían ser solucionados desde una reestructuración en la tenencia de la tierra y mayor justicia en la distribución de los ingresos entre quienes contribuían a producirlos con su trabajo.

El gobierno insistía según Ellacuría en la finalidad de lograr un cambio integral

² tomado del diario Latino, 12 de julio de 1976

en las anacrónicas estructuras que habían mantenido a la gran mayoría de compatriotas en un atraso secular, víctimas del subdesarrollo económico. Es cierto que se debía aceptar la propiedad privada pero no como la entendía la ANEP, sustentada en la teoría del absolutismo, la exclusividad y la perpetuidad como condiciones del derecho de propiedad.

La reforma agraria, debía realizarse a los fines de poder equilibrar el ejercicio de las libertades y el desarrollo económico de toda la sociedad en conjunto. Para ello era necesario según el pensamiento de Ignacio Ellacuría, en primer lugar la participación del estado en asuntos que afectaban estructuralmente a la totalidad de la sociedad y en especial en aquellos sectores que dejados a sí mismos generaban una acumulación y concentración de poder económico social y político incompatibles con la equidad y el bien común y propiciaban las más diversas formas de opresión y en segundo lugar que la dirección de esa intervención fuese en el sentido de hacer más justa la estructura misma de la propiedad de los grandes medios de producción.

Sin embargo, lejos de beneficiar a las clases trabajadoras, la reforma agraria de los años 70 profundizó aún más la brecha entre pobres y ricos, y en este contexto era muy difícil poder mantener el orden social considerando que el empobrecimiento tenía como forma de expresión la protesta social.

De esta forma las décadas anteriores al conflicto civil armado prepararon el escenario de confrontación en un círculo vicioso en el que los gobiernos, las fuerzas de seguridad y los sectores económicos de las grandes empresas ejercieron su poder de dominación sobre un pueblo que tuvo que alzarse en armas para que su voz fuera escuchada.

Nos parece importante recordar qué, el poder como herramienta para llevar adelante una transformación debe tener como ejes centrales la consideración del hombre como un ser cuyas características esenciales son la libertad y la propiedad. Pero ambas deben ser elementos de transformación social que permitan al hombre su propio desarrollo, íntimo y comunitario. Si esto no es así, entonces el trabajo del filósofo, la política como práctica social y la ideología como sistema de valores no tiene sentido. De tal modo es importante tener en cuenta que:

...la guerra civil salvadoreña solo puede entenderse como resultado de una serie de sucesos que llevaron al pueblo a la formación de ejércitos clandestinos, destinados a asumir la responsabilidad de producir a como diera lugar, los cambios necesarios para instalar un nuevo orden social y político en su país. (Perales, I. 2009, 2)

La historia salvadoreña desde su periodo de modernización capitalista fue construida sobre cinco décadas de conflicto, de violencia simbólica, de represión

física, de fallidos intentos de democratización y de deterioro económico, sumado a doce años de lucha armada en la que la ruptura de la estructura social, se dio en un largo proceso que tuvo como germen el conflicto del campo, pero que con el tiempo fueron de-construyendo con sus voces al orden simbólico opresor que se había jugado como único orden social posible. Ansaldi y Giordano sostienen que:

...para enfrentar el poder simbólico dominante (...) los dominados deben generar conciencia y formas de acción política que rompan con la lógica de sometimiento en la que han sido socializados. Es decir, producir otro sistema simbólico (el de la transformación) con el cual enfrentar al vigente (el de la conservación), entablando una lucha simbólica por el modo legítimo de establecer una concepción del mundo. (Ansaldi, W. y Giordano, V. 2012, 33)

Esa conciencia fue generada en El Salvador por la acción de las masas que resistieron y enfrentaron el poder porque sabían que era la única forma, no posible, pero si real de lograr deconstruir la lógica de sometimiento en la que habían estado inmersos durante tantas décadas, también fue generada y transmitida por las enseñanzas y las reflexiones de pensadores como Ignacio Ellacuría que pusieron su vida al servicio del compromiso social exigido por su vocación, pero más aún, por la transmisión de sus valores desde el análisis crítico de la realidad de su tiempo y desde el acompañamiento en esa lucha por la libertad y por el respeto de la dignidad del pueblo salvadoreño.

Bibliografía

- Algranati, Clara; José Seoane y Emilio Taddei. 2006. Movimientos sociales y neoliberalismo en América Latina, Buenos Aires: Mimeo.
- Amin, Samir. 2001. "Capitalismo, imperialismo, mundialización". En Resistencias mundiales. De Seattle a Porto Alegre. Compilado por José Seoane y Emilio Taddei. Buenos Aires: CLACSO.
- Amin, Samir. 2001. "Capitalismo, imperialismo, mundialización". En Resistencias mundiales. De Seattle a Porto Alegre. Compilado por José Seoane y Emilio Taddei. Buenos Aires: CLACSO.
- Ansaldi, Waldo y Giordano, Verónica. 2012. América Latina. La construcción del Orden. Tomo I: De la colonia a la disolución de la dominación oligárquica. Buenos Aires, Ariel.

- Ansaldi, Waldo y Giordano, Verónica. 2012. América Latina La construcción del Orden. Tomo II: De las sociedades de masas a las sociedades en procesos de reestructuración. Buenos Aires. Ariel.
- Arpini, Adriana. 2017. "Ignacio Ellacuría, acerca de la filosofía, la realidad histórica, el bien común y los Derechos Humanos". En Diversidad e Integración en Nuestra América Vol III. Coordinado por Adriana Arpini, Clara Jalif de Bertranou y Dante Ramaglia. Buenos Aires: Biblos, 355 - 371
- Boron, Atilio. 2008. Teoría(s) de la Dependencia. Realidad Económica 238, 20-43.
- Cardoso, Fernando Henrique y Faletto, Enzo. 1978. Dependencia y desarrollo en América Latina, México: Siglo XXI Editores.
- Ceceña, Ana Esther. 2004. Militarización y resistencia. Osal. Debates. V (15), 33-44
- Ellacuría, Ignacio. 2005. Escritos Políticos. Veinte años de historia en El Salvador. (1969-1989), Tomo I, II y III. El Salvador: UCA
- Hobsbawm, Eric. 1989. La Historia del siglo XX 1914-1991, Barcelona: Crítica
- Perales, Iosu. 2009. ¿Por qué la guerra en El Salvador? (1970-1980). El Salvador: Ocean Sur.
- Perales, Iosu. 2009. Los Acuerdos de Paz en El Salvador (1992). El Salvador: Ocean Sur.
- Perales, Iosu. 2009. Los Años de plomo en El Salvador (1981-1992). El Salvador: Ocean Sur.